



NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL

20 SEP 1958



Distr.
GENERAL

E/CONF.26/SR.6
15 septiembre 1958
ESPAÑOL
ORIGINAL: FRANCES

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

ACTA RESUMIDA DE LA SEXTA SESION

Celebrada en la Sede, Nueva York,
el viernes 23 de mayo de 1958, a las 10.45 horas

SUMARIO

Examen del proyecto de Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (E/2704/Rev.1, E/2822 y Add.1 a 6; E/CONF.26/2, 26/3 y Add.1, 26/4, 26/7; E/CONF.26/L.6 a L.12) (continuación)

Presidente:

Sr. SCHURMANN

Países Bajos

Secretario Ejecutivo:

Sr. SCHACHTER

EXAMEN DEL PROYECTO DE CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS (E/2704/Rev.1, E/2822 y Add.1 a 6; E/CONF.26/2, 26/3 y Add.1, 26/4, 26/7; E/CONF.26/L.6 a L.12) (continuación)

Debate general (continuación)

Sir Claude COREA (Ceilán) declara que muchas razones militan a favor de una nueva convención. Desde 1927 aumentan sin cesar el volumen y la complejidad del comercio internacional; cambios revolucionarios de orden político (aparición de un número importante de naciones que recientemente han adquirido su independencia), económico (mayor cooperación entre los Estados) y técnico (últimos descubrimientos científicos) han modificado radicalmente el carácter del comercio mundial. Un instrumento internacional más preciso y completo que la Convención de 1927 favorecerá la expansión del intercambio y, por consiguiente, la prosperidad y el bienestar general. Contribuirá también al desarrollo progresivo del derecho internacional, que es uno de los objetivos de las Naciones Unidas. Ceilán, que en el curso de estos últimos años ha aprobado algunas leyes destinadas a fomentar y facilitar el arbitraje, encuentra especial satisfacción en que se haya reunido esta Conferencia.

Su delegación aprueba en general el proyecto del Comité Especial (E/2704/Rev.1); pero Sir Claude Corea desea presentar algunas observaciones y reservar su derecho a intervenir más extensamente en el debate, artículo por artículo. Es muy acertado definir con gran flexibilidad el campo de aplicación de la Convención, para que el mayor número posible de Estados logre ponerse de acuerdo; pero no debería caerse en una definición demasiado imprecisa. La delegación de Ceilán apoyará toda redacción que se inspire en nociones jurídicas claras, sin olvidar las dificultades particulares que pueden plantearse a ciertos Estados. La Conferencia debería examinar con suma atención las disposiciones relativas al control judicial del reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales, en vista de la dificultad de armonizar el respeto a la autonomía de voluntad de las partes y las prerrogativas del Estado en cuyo territorio se ha de ejecutar la sentencia.

El Sr. TODOROV (Bulgaria) cree que la firma de una Convención fomentará indirectamente el desarrollo del intercambio comercial, en particular entre países pertenecientes a los dos sistemas económicos y sociales, y contribuirá al desarrollo del derecho internacional y la cooperación entre las naciones.

/...

(Sr. Todorov, Bulgaria)

Desde 1952 el volumen de comercio búlgaro con el extranjero ha aumentado en más del doble; Bulgaria mantiene actualmente relaciones comerciales con 63 países. Se recurre, pues, con mayor frecuencia al arbitraje, y en algunos acuerdos comerciales se prevé expresamente esta forma de solución de las controversias comerciales.

La principal finalidad de la Convención debe ser instituir procedimientos rápidos, simples, claros y eficaces para eliminar las consecuencias de los litigios y desacuerdos que ocasionen las transacciones comerciales. La Convención debe ser lo más universal posible; habrá que rechazar toda discriminación de orden político. Todo Estado debe poder ser parte en ella. Por la misma razón la Conferencia deberá rechazar la cláusula llamada "colonial" que se ha eliminado de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y del Proyecto de Pacto relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo mismo cabe decir de la cláusula "federal".

Sería conveniente enumerar en forma precisa y limitativa los motivos que pueden invocarse para rechazar el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales.

Las decisiones de las autoridades arbitrales permanentes, establecidas conforme a la ley de los Estados contratantes, deberían considerarse sentencias arbitrales en el sentido que se da a esta expresión en esta Convención. Por último, el hecho de que las controversias respecto de la interpretación o aplicación de la Convención sean sometidas a la Corte Internacional de Justicia no debe eliminar la jurisdicción obligatoria de la Corte.

El Sr. MALOLES (Filipinas) recuerda que, por lo general, en materia de arbitraje, se plantea un conflicto entre el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y el derecho de vigilancia de los Estados y sus tribunales. Esto se aplica, muy en particular, a la ejecución de las sentencias arbitrales, especialmente cuando se las invoca en un país distinto de aquél en que han sido dictadas. La variedad de disposiciones relativas al procedimiento arbitral, a los recursos contra las sentencias arbitrales y a las modalidades de su ejecución constituyen otras tantas dificultades más. El Protocolo de 1923 y la Convención de 1927 se firmaron precisamente para resolver estas dificultades. Más recientemente la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa recomendó que se constituyera un Comité de Expertos de los gobiernos encargado de preparar un Convenio europeo

/...

(Sr. Maloles, Filipinas)

de arbitraje inspirado en la Ley Uniforme de Arbitraje redactada por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. La Organización de Estados Americanos ha elaborado, por su parte, un sistema interamericano de arbitraje al que se han incorporado disposiciones sobre la ejecución de las sentencias y decisiones extranjeras en los tratados de Montevideo y en el Código Bustamante. La Séptima Conferencia de Estados Americanos había preconizado la adopción de ciertas normas en esta materia; pero Colombia fué el único Estado que se plegó a esta recomendación. En 1956 se aprobó un proyecto de ley uniforme sobre arbitraje comercial interamericano. Corresponde mencionar también los trabajos de diversas organizaciones no gubernamentales.

Los principales obstáculos al desarrollo del arbitraje comercial son los siguientes: las diferencias de las legislaciones y los procedimientos de arbitraje; la dificultad de sustraer a la competencia de los tribunales los litigios resueltos por vía arbitral; la dificultad de determinar la ley aplicable; la incertidumbre sobre la cuestión de saber en qué medida el Tribunal Arbitral puede resolver fundándose en consideraciones de equidad más bien que en conceptos estrictamente jurídicos; las condiciones relativas a la nacionalidad de los árbitros; la dificultad de hacer ejecutar una sentencia extranjera; la circunstancia de que las cláusulas compromisorias rara vez se adaptan al carácter del caso litigioso; la falta de medios de arbitraje, las dificultades de cambio que impiden pagar honorarios a los árbitros extranjeros.

Cabe esperar que el proyecto de Convención, con las modificaciones apropiadas, contribuya a resolver esas dificultades. Se ha propuesto crear dentro del sistema de las Naciones Unidas una secretaría internacional que se encargará de registrar y examinar las sentencias internacionales, y certificar su validez; este sistema ha de facilitar enormemente la ejecución de las sentencias, que sólo podría negarse por los motivos previstos.

Filipinas ha reconocido desde hace mucho la validez de arbitraje como forma de solución de los litigios. El Código Civil de 1899 y el Código Civil enmendado de 1950 contienen disposiciones a este respecto. En principio, correspondería a la Corte Suprema, definir las normas para designar a los árbitros y el procedimiento arbitral; pero a falta de esa definición el Congreso aprobó la

(Sr. Maloles, Filipinas)

Ley No. 876 sobre arbitraje que representa un progreso considerable, a pesar de no contener ninguna disposición sobre la ejecución de las sentencias extranjeras. La jurisprudencia filipina reconoce la validez de las sentencias arbitrales dictadas conforme a la ley y al compromiso o a la cláusula compromisoria cuando las sentencias son definitivas y ejecutorias y compatibles con el orden público. Pero todavía muy rara vez se recurre en Filipinas al procedimiento de arbitraje y hasta el presente sólo en dos oportunidades los tribunales filipinos han podido pronunciarse sobre una sentencia arbitral.

El Sr. KESTLER FARNES (Guatemala) manifiesta que su delegación participa en la presente Conferencia, convencida de la importancia que tiene para el desarrollo del comercio internacional. En el estado actual de las relaciones internacionales es necesario adoptar normas comunes para el arreglo de los litigios comerciales. El reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras plantean problemas complejos. Así se explica que el proyecto, en unos casos, esté concebido en términos amplios, y en otros, contenga algunas limitaciones. Y esto no debe considerarse como un defecto, sino como una virtud, pues demuestra que sus redactores trataron de adaptarlo a la realidad. La diversidad de sistemas legislativos impone la necesidad de elaborar normas comunes, que consagran principios universalmente reconocidos, sin dejar de respetar al mismo tiempo los derechos de soberanía de los Estados o los principios que informan su derecho público o su orden público internos.

Guatemala reconoce la validez del procedimiento arbitral y ha participado en trabajos de conferencias interamericanas sobre esta materia. La delegación guatemalteca estima aceptable "en general" el proyecto de convención, y deja a salvo reservas que tenga que hacer sobre algunos artículos en particular. Se reserva el derecho a volver a intervenir en el debate artículo por artículo.

El Sr. KAISER (Pakistán) advierte que el desarrollo del comercio internacional ha demostrado la insuficiencia de la Convención de Ginebra y que conviene volver a estudiar los procedimientos de ejecución de las sentencias arbitrales teniendo en cuenta las circunstancias del momento. El arbitraje es un medio económico de resolver los litigios que se suscitan en las relaciones comerciales internacionales; como su mérito reside parcialmente en su simplicidad,

/...

(Sr. Kaiser, Pakistán)

importa dejar a las partes un papel predominante en el procedimiento. No deberá olvidarse este factor al examinar el proyecto de Convención.

Este documento es mejor que la Convención de 1927, pero cabe hacerle ciertas reservas. Para no salir del terreno de las generalidades, podría señalarse en particular que el proyecto no incluye ninguna definición de las expresiones o términos más importantes que en él se emplean. Sería conveniente, pues, incluir un artículo suplementario en el que se definieran, entre otras cosas, las sentencias arbitrales, el procedimiento de arbitraje, las personas naturales o jurídicas, los contratos comerciales y los Estados contratantes. La incorporación de este artículo sería conforme al uso internacional, y serviría además para dar a la Convención un carácter práctico más concreto.

El Sr. GURINOVICH (República Socialista Soviética de Bielorrusia) opina que no ha de escatimarse esfuerzo alguno por ampliar la cooperación económica internacional. Conviene fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales entre las naciones fundadas en la igualdad y el interés mutuo, tanto más cuanto que contribuirá a crear una mayor confianza entre los Estados. A este respecto ejercería feliz influencia una Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras porque facilitaría la solución rápida y eficaz de las controversias. Desde luego, habrá que procurar que ninguna disposición del instrumento pueda crear dificultades y que se ofrezca a todos los Estados la posibilidad de adherirse. Por lo tanto, convendría modificar algunos aspectos del proyecto sometido a consideración de la Conferencia.

Artículo primero (continuación)

El Sr. KORAL (Turquía) comprueba que las críticas hechas a su enmienda (E/CONF.26/L.9) en la sesión anterior (E/CONF.26/SR.5) se reducen a una sola: el temor de que los Estados se vean obligados a admitir la validez de un procedimiento arbitral que se aplique en su propio territorio conforme a una ley extranjera. Pero el texto propuesto no tendría esta consecuencia. Cuando se dice, como en la enmienda turca, que se considera sentencia extranjera o internacional la recaída bajo la autoridad de una ley distinta de la ley del lugar en que se pide su reconocimiento o ejecución, no es lo mismo que decir que en un país determinado se puede aplicar un procedimiento arbitral conforme a la ley de otro Estado. En el segundo caso existe un elemento permisivo que falta

/...

(Sr. Koral, Turquía)

completamente en el primero. En realidad, la fórmula turca es una simple definición por la que se precisa que si una sentencia ha sido dictada bajo la autoridad de una ley que no sea la del lugar en que ella se invoca, se trata de una sentencia a la que se aplica la Convención. El texto turco no va más allá y los temores expresados a este respecto no parecen fundados.

Para ilustrar el alcance exacto de su enmienda el representante de Turquía da el ejemplo siguiente: dos ingleses que residen en Inglaterra subordinan la solución de un litigio a la ley francesa. El árbitro dicta una sentencia conforme a esta ley. Se pide el exequátur al juez inglés que comprueba que el procedimiento se ha realizado conforme al derecho francés mientras que la ley inglesa sigue en ese caso la aplicación del procedimiento arbitral inglés. La fórmula propuesta no obligaría al juez inglés a considerar extranjera esa sentencia y a darle el exequátur puesto que se halla ante una norma jurídica inglesa prohibitiva y de alcance preciso.

El criterio previsto no tiende a introducir una excepción en la regla interna inglesa, sino que ofrece simplemente una definición de la sentencia no nacional. Por consiguiente, el juez inglés podrá aplicar la Convención en los casos en que una sentencia conforme al derecho inglés, puede ser válida con arreglo a una ley extranjera. En este caso no habría inconveniente, al parecer, desde el punto de vista del derecho inglés, en que el juez inglés acuerde el exequátur a una sentencia de arbitraje dictada en Turquía conforme a la ley turca, aunque se tratara de un litigio entre un turco y un griego y aunque este litigio hubiera sido resuelto en Turquía con arreglo a la legislación francesa.

El criterio propuesto por Turquía no trata en modo alguno de oponerse a las leyes nacionales prohibitivas o imperativas, pero es más flexible que el criterio territorial. Ahora bien, es esencial dar al juez del exequátur de los países de derecho continental mayor latitud en lo que se refiere a la determinación de las sentencias nacionales y las sentencias extranjeras. La enmienda turca responde a esta necesidad sin contrariar por ello a los países de derecho angloamericano y a los países de derecho sudamericano. Es la única fórmula aceptable por todos: no impide al juez local considerar nacional una sentencia arbitral

/...

(Sr. Koral, Turquía)

dictada en su país con arreglo a una ley extranjera; permite al juez considerar como sentencia extranjera toda sentencia dictada en un país extranjero conforme a la ley de ese país y tiene en cuenta el concepto continental según el cual el arbitraje puede efectuarse en un país conforme a la ley de otro país.

Si se aprueba la enmienda de Turquía no será necesario modificar los términos empleados en el resto de la Convención y bastaría con precisar en un artículo el sentido que debe darse a la expresión "sentencias extranjeras".

El Sr. BULOW (República Federal de Alemania) quiere completar las observaciones hechas por su Gobierno al capítulo primero del proyecto de convención (E/2822, anexo 1). No parece satisfactoria la solución en virtud de la cual la Convención se aplicaría a las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquél en cuyo territorio se invocan estas sentencias. El representante de la República Federal de Alemania cita a este propósito el ejemplo siguiente: dos comerciantes alemanes residentes en el Reino Unido someten un litigio a arbitraje; designan con este objeto un tribunal arbitral, con sede en Londres, compuesto de residentes alemanes y aplicando el procedimiento alemán. Ateniéndose exclusivamente al criterio territorial, la nacionalidad de la sentencia no da lugar a dudas: se trata de una sentencia inglesa. Pero esa solución no parece justa; como se ha aplicado la ley alemana de procedimiento, el derecho alemán considerará a la sentencia como alemana; además dicha solución resultaría muy perjudicial para la autonomía de la voluntad de las partes, que debe respetarse. Por lo demás, según la obra de Russel sobre el arbitraje no es seguro que se aplique estrictamente la teoría territorial, ni siquiera en los países anglosajones.

Por lo tanto, conviene prever un criterio de conexión diferente del enunciado en el proyecto. El representante de Francia ha manifestado que, según la jurisprudencia de la Corte de Casación francesa y de la Corte Suprema de la República Federal de Alemania, la naturaleza de la sentencia depende de las reglas de procedimiento aplicadas. Así opina también Klein en su obra titulada "Consideraciones sobre el arbitraje en derecho internacional privado" (página 311). Por último conviene hacer notar que la nacionalidad de las partes no influye

/...

(Sr. Bulow, República Federal de Alemania)

en el carácter interno o extranjero de una sentencia y en este punto no hay distinción entre los países de derecho civil y los de common law.

Las enmiendas de las ocho Potencias (E/CONF.26/L.6) y de Turquía (E/CONF.26/L.9) reflejan preocupaciones análogas; pero, aunque la segunda fórmula resulta aceptable, la primera parece preferible. Dejando al juez la facultad de decidir sobre el carácter nacional o no nacional de una sentencia, evita toda intrusión en la esfera del derecho interno.

El Sr. Bulow precisa para terminar, que la enmienda común (E/CONF.26/L.6) puede integrarse sin dificultad terminológica en el resto del proyecto.

El Sr. ZULETA ANGEL (Colombia) estima que el campo de aplicación de la Convención plantea un problema fundamental. Como la República Federal de Alemania lo indica en sus observaciones (E/2822, pág. 3), la mejor solución sería unificar las legislaciones internas adoptando un derecho uniforme. En su defecto, conviene adoptar un criterio permanente para determinar con precisión a qué sentencias arbitrales se aplicará la Convención. En efecto, y esto es de gran importancia, cada Estado signatario debe saber exactamente a qué se comprometen los demás. Por ello la delegación colombiana no encuentra satisfactoria la enmienda de las ocho Potencias (E/CONF.26/L.6). El criterio propuesto es demasiado impreciso. Hay que fijar un criterio perfectamente claro que no se preste a interpretaciones distintas. La Conferencia se propone redactar una convención para el reconocimiento y ejecución de ciertas sentencias denominadas extranjeras y lo menos que puede hacer es definir las sentencias a las cuales se ha de referir esta Convención. En la hipótesis prevista por la República Federal de Alemania (E/2822, pág. 3), la misma sentencia puede considerarse nacional por dos Estados diferentes, pero esta situación ofrece en realidad un argumento de peso contra la fórmula tan poco precisa de la enmienda de las ocho Potencias. Si la Conferencia adopta esta proposición, los signatarios de la futura convención no sabrán exactamente cuál será su campo de aplicación.

El representante de Turquía ha tratado de establecer un criterio que permita determinar si una sentencia es extranjera a efectos de la Convención (E/CONF.26/L.9). Por desgracia, tampoco esta enmienda es satisfactoria y sobre este punto la delegación de Colombia casi coincide con la opinión de los representantes de Bélgica y Guatemala. En Colombia, algunas reglas de procedimiento

(Sr. Zuleta Angel, Colombia)

que rigen en el arbitraje son disposiciones de orden público, tienen carácter imperativo y están elevadas a la categoría de leyes constitucionales. Por consiguiente, Colombia no puede reconocer ninguna autoridad a una sentencia arbitral que no se haya dictado en conformidad con esas reglas imperativas.

Si la mayoría de la Conferencia se pronunciara a favor de la enmienda turca, convendría tal vez modificar su redacción. El representante de Turquía ha evocado el caso de un país en donde todas las reglas del arbitraje fueran facultativas. Si las partes deciden constituir en dicho país un tribunal arbitral aplicando un procedimiento extranjero, la delegación colombiana estima que con la redacción dada a la enmienda turca debería considerarse la sentencia arbitral como nacional y no como extranjera, puesto que habría sido dictada en virtud de la autoridad de la legislación nacional que permite a las partes aplicar una ley extranjera.

Se ha criticado el criterio territorial que sigue el artículo primero del proyecto de Convención. El representante de la República Federal de Alemania ha citado ejemplos para demostrar que en algunos casos la sentencia dictada en el territorio de un Estado distinto de aquél en que se invoca debe, sin embargo, considerarse como nacional. El representante de Francia ha criticado el criterio territorial porque podría resultar difícil precisar el lugar de la sentencia, como por ejemplo cuando ésta se dicta por correspondencia. Pero éste es un caso excepcional. Los árbitros deben discutir, escuchar a las partes, deliberar, actividades todas que exigen que el tribunal arbitral tenga una sede. Aun cuando se considera el caso extremo de una sentencia dictada por correspondencia, el lugar de la sentencia podrá fijarse, como se hace en todas las legislaciones, en el lugar de conclusión del contrato por correspondencia. Por estas razones, el representante de Colombia no cree que puedan hacerse objeciones de peso al artículo primero del proyecto. Este artículo no es indudablemente perfecto, pero tiene el mérito de ofrecer un criterio y parece indicado confiar a un grupo de trabajo la tarea de mejorarlo.

El Sr. COHEN (Israel) hace suyas las observaciones del representante de Colombia respecto de la enmienda turca (E/CONF.26/L.9). Ese texto plantea toda clase de cuestiones jurídicas que harán sin duda las delicias de los juristas,

(Sr. Cohn, Israel)

pero el paraíso de los juristas suele ser a menudo un infierno para los litigantes. No hay que perder de vista que la finalidad principal de la Conferencia es redactar una convención clara, inequívoca y fácil de aplicar. Como ha tenido ocasión de cambiar impresiones con varios representantes, el Sr. Cohn está más persuadido que nunca de que la solución consiste en discutir problemas en grupos de trabajo.

El Sr. KESTLER FARNES (Guatemala) declara que su país, manteniéndose fiel al principio de la territorialidad, no puede aceptar otro criterio que le plantearía problemas insolubles, dado el carácter imperativo de las leyes guatemaltecas de procedimiento. A este respecto puede señalarse que la legislación guatemalteca es bastante paralela a la colombiana, y que tanto en Guatemala como en Colombia muchas disposiciones de procedimiento son de naturaleza constitucional. Por esto Guatemala no podría aceptar otro criterio sin modificar su Constitución.

Según la ley guatemalteca, sólo puede concederse el exequátur a una sentencia extranjera en virtud de ciertas condiciones, que se derivan del principio de la territorialidad o de razones de orden público. Así, por ejemplo, en Guatemala no sería posible ejecutar una sentencia extranjera recaída en rebeldía o contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Del mismo modo, tampoco se podría ejecutar una sentencia derivada del ejercicio de una acción real o que afectara a bienes situados en Guatemala, porque ello crearía dificultades inextricables. El representante de Guatemala no pretende, desde luego, que la legislación de su país se imponga en la Conferencia, sino que trata de buscar una solución que no afecte las bases mismas de los sistemas vigentes en cada uno de los Estados participantes.

El Sr. URABE (Japón) no cree por las razones que ha indicado el representante de Israel, que la enmienda de las ocho Potencias (E/CONF.26/L.6) sea aceptable. La delegación japonesa prefiere el texto primitivo, que tiene el mérito de ofrecer un criterio muy claro para determinar lo que se entiende por sentencia extranjera. El mundo mercantil desea criterios perfectamente claros que permitan conocer con seguridad y por anticipado qué sentencias serán reconocidas y ejecutadas en éste o aquel país. Si la Conferencia adoptara la enmienda de las ocho Potencias, los comerciantes quedarían en la incertidumbre.

/...

(Sr. Urabe, Japón)

Además, la enmienda tendría al parecer profundas repercusiones en otros artículos, sobre todo en los artículos III y IV. También influye en la cuestión la necesidad de saber si conviene confiar la revisión judicial al país en que se ejecuta o en que se dicta la sentencia, y la delegación japonesa quisiera, antes de adoptar una posición definitiva, que uno de los autores aclarase este punto.

La delegación japonesa comprende perfectamente la teoría jurídica que sirve de base a la enmienda turca (E/CONF.26/L.9) pero no está convencida que el texto sea aceptable desde el punto de vista práctico. Si la Conferencia adoptara esta enmienda, la Convención podría o no ser aplicada según la ley interna del país en que se invoque la sentencia. La delegación japonesa estima que la Conferencia deberá respetar lo más posible las exigencias de la vida comercial internacional haciendo, en caso necesario, que el derecho se adapte a estas exigencias.

El Sr. HERMENT (Bélgica) se pregunta si no es prematuro, teniendo en cuenta las distintas opiniones que se han presentado sobre el campo de aplicación de la Convención, confiar esta cuestión a un grupo de trabajo. Tal vez sería mejor adoptar primero una decisión de principio sobre el tema.

El representante de Bélgica señala al representante de Turquía que en su país es perfectamente posible recurrir al arbitraje ajustándose a un procedimiento extranjero.

La enmienda turca (E/CONF.26/L.9) tendría el inconveniente de provocar en muchos casos negativas de ejecución. En virtud de ella no estaría sometida a la Convención una sentencia dictada en el extranjero con arreglo a la ley belga. Ahora bien, como dicha sentencia sería considerada en Bélgica como sentencia extranjera, no podría ejecutarse ni con arreglo al derecho nacional, ni con arreglo a la convención. Por esto es preciso no adoptar un criterio demasiado estricto; vale más elegir uno que pueda adaptarse a los diferentes sistemas y dejar que para la ejecución de las sentencias extranjeras prevalezca la confianza recíproca de las partes.

Se levanta la sesión a las 13 horas.